

## Reconfiguración del poder, disputas interburguesas y deterioro de la clase trabajadora bajo el régimen de la 4T

Humberto Márquez Covarrubias\*

*Resumen.* La cuarta transformación en México no significa una ruptura con el capitalismo dependiente, sino una reconfiguración de corte bonapartista del Estado cuyo cometido es reflotar la acumulación de capital, ante el agotamiento del modelo neoliberal y apuntalar a las facciones intergeneracionales de la burguesía nacional integradas al nuevo bloque de poder con privilegios. En contraste, la situación de la clase trabajadora ha sido comprometida mediante la desvalorización de su fuerza y la expropiación del fondo de vida para crear uno de acumulación que financia megaproyectos, cubre la deuda externa y transfiere dinero a bases sociales de apoyo. Mientras que se genera una nueva burguesía y se fragmenta al proletariado para facilitar su explotación y superexplotación de manera segmentada. El Estado ha centralizado poder y dinero para fungir como árbitro entre las facciones burguesas en disputa, a la vez para desarmar la independencia política de la clase trabajadora. En consecuencia, se abre el debate sobre la necesidad de construir una representación política obrera autónoma frente a la militarización económica y el mando de corte bonapartista.

*Palabras clave:* Estado, burguesía, proletariado, cuarta transformación, México.

*The reconfiguration of power, inter-bourgeois disputes,  
and the degradation of the working class under the 4T regime*

*Abstract.* The fourth transformation in Mexico does not signify a break with dependent capitalism, but rather a Bonapartist-style reconfiguration of the state whose mission is to revive capital accumulation in the face of the neoliberal model's exhaustion and to shore up the intergenerational factions of the national bourgeoisie integrated into the new power bloc with privileges. In contrast, the situation of the working class has been compromised through the devaluation of its force and the expropriation of the fund of life to create another of accumulation that finances megaprojects, covers the foreign debt, and transfers money to social support bases. While a new bourgeoisie is being generated and the proletariat is being fragmented to facilitate its exploitation and super-exploitation in a segmented manner. The state has centralized power and money to act as an arbiter among the disputing bourgeois factions, while simultaneously dismantling the political independence of the working class. Consequently, a debate has opened up regarding the need to build an autonomous workers' political representation in the face of economic militarization and Bonapartist-style rule.

*Keywords:* State, bourgeoisie, proletariat, fourth transformation, México.

\* Docente-investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Correo-e: hmarquez@uaz.edu.mx

DOI: <https://doi.org/1035533/ecd.1528.hmc>

RECIBIDO 13/11/2024

ISSN IMPRESO 2448-5020

ACEPTADO 18/12/2024

ISSN RED CÓMPUTO 2594-0899

## Radiografía de la 4T: reconfiguración del poder y disputas interburguesas

La denominada cuarta transformación (4T) no debe entenderse como un fenómeno espontáneo, en cambio es el resultado del agotamiento del patrón de acumulación neoliberal y la consecuente crisis de representación de las facciones burguesas en México, desde tiempo atrás se ha venido arrastrando (Márquez, 2020; Gilly, 2006; Córdova, 1972). Este proceso se gestó dentro del mismo sistema: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no surge de la nada, sino que representa la evolución política de cuadros provenientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes capitalizaron el descontento social ante el colapso del modelo previo para canalizarlo hacia una nueva estructura de mando.

El panorama actual se comprende mejor a través de una estratificación de tres capas de poder económico que hoy coexisten y colisionan. En la base se encuentra la burguesía «anciana», heredera del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y asentada en los grandes grupos industriales del norte y centro del país. Relativo a ella se superpone la burguesía «vieja» o neoliberal, gestada en la década de 1980 tras el quiebre del modelo nacionalista y principal beneficiaria de la ola privatizadora de activos estatales en sectores como las telecomunicaciones y la banca. Finalmente, emerge la burguesía «nueva», una facción que surge al amparo del régimen presente integrada por una cúpula militar con control sobre aduanas y aeropuertos, nuevos contratistas beneficiados por asignaciones directas y actores de la economía informal que operan en las regiones.

Desde este mirador, la clase dominante contemporánea es un bloque variopinto que suma a estas tres generaciones. Irónicamente, lo que en la retórica oficial se denomina la «mafia del poder» ha alcanzado en la 4T su máximo esplendor de integración, aunque bajo una nueva dirección política. Esta representación no es ideológica, sino pragmática; se erige bajo un mando bonapartista que, en términos de Poulantzas (1975), ejerce una autonomía relativa para disciplinar a las facciones. Está encarnada por una burocracia que amalgama a emisarios de la vieja izquierda nacionalista, cuadros del progresismo identitario y derechas empresariales que encontraron en el partido oficial un refugio para sus intereses. Morena funciona así como un paraguas de intereses contradictorios, donde la mayoría de sus líderes comparten un ADN priista y una convergencia de intereses para la reproducción del poder, utilizando la ideología como un simple envoltorio.

Uno de los rasgos más distintivos de este periodo es la irrupción de las fuerzas armadas como un actor económico empresarial (Aguayo, 2021), que altera las reglas de competencia con la burguesía civil tradicional y configura lo que podría denominarse la «nueva burguesía castrense». Al amparo de la seguridad nacional, la casta militar gestiona megaproyectos bajo regímenes de excepción (Zavaleta, 2020), sin licitaciones transparentes y con una opacidad en el gasto inaccesible para la burguesía civil. Esto no representa sólo una transferencia de funciones, en todo caso es una transferencia masiva de capital y activos estatales hacia un sector que ahora compete en el mercado desde una posición de privilegio absoluto, hecho que la consolida como un pilar autónomo de la acumulación de poder en el país.

Dicha disputa interburguesa posee también una expresión geográfica clara. Mientras que la burguesía industrial permanece anclada en el eje

norte-centro, el régimen de la 4T ha volcado el aparato estatal hacia el sureste estratégico. Mediante proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, el gobierno busca crear una base territorial de poder para su propia facción empresarial, al integrar el sur al mercado global como un enclave logístico subordinadas al control directo de la nueva burocracia civil-militar. Paralelamente, el régimen mantiene un cordón umbilical intacto con la burguesía neoliberal rentista mediante un pacto de disciplina fiscal. Bajo el dogma de la «pobreza franciscana» se garantiza la estabilidad macroeconómica y el flujo de pagos a los grandes poseedores de deuda y capitales bursátiles, evita fugas de capital y asegura que las fortunas del periodo neoliberal sigan expandiéndose.

En última instancia, la 4T no representa una ruptura con la oligarquía. Al contrario, es la recomposición en un bloque de poder híbrido. La clase dominante actual es una amalgama donde conviven el capital industrial del norte —replegado pero resistente—, la élite financiera y extractiva beneficiaria de la estabilidad fiscal, y la emergente casta militar-burocrática dueña de la nueva infraestructura. Este bloque es gestionado por una clase política pragmática que, carente de una ideología de clase obrera, encabeza un proyecto de capitalismo de Estado. Su función es reorganizar los beneficios para permitir la entrada de nuevos jugadores sin destruir los cimientos de los antiguos, que logra la integración de la cúpula económica ceñida a un nuevo mando capaz de administrar el conflicto discursivo y la continuidad del modelo de acumulación.

RECONFIGURACIÓN DEL PODER, DISPUTAS INTERBURGUESAS  
Y DETERIORO DE LA CLASE TRABAJADORA

Cuadro 1  
Capas de la burguesía mexicana bajo la 4T

<i>Categoría</i>	<i>Burguesía «anciana» (ISI)</i>	<i>Burguesía «vieja» (neoliberal/TLCAN)</i>	<i>Burguesía «nueva» (4T/militar)</i>
Ramas productivas	Industria pesada, acero, cemento, manufactura básica y textil.	Telecomunicaciones, banca, minería, comercio minorista y energía.	Construcción civil-militar, logística, aduanas, hidrocarburos y seguridad.
Poder económico	Regionalizado (norte/centro). Representa el núcleo industrial tradicional.	Globalizado. Concentra el grueso del PIB y la capitalización bursátil.	En ascenso acelerado. Controla el presupuesto de infraestructura y rentas públicas.
Dependencia del Estado	Alta (proteccionismo y subsidios energéticos).	Simbiótica (concesiones, privatizaciones y deuda pública).	Absoluta (contratos directos, presupuesto estatal y mando político).
Representación política	Orgánica en el PAN y sectores del viejo PRI.	Tecnocracia transpartidista y grupos de cabildeo internacional.	Morena y la estructura de mando de las Fuerzas Armadas (Sedena/Semar).
Ejemplos	Familias del Grupo Monterrey (Garza Sada), Grupo Alfa, Altos Hornos.	Carlos Slim (Carso), Germán Larrea (México), Ricardo Salinas (Salinas).	«Burguesía castrense» (mandos militares), Grupo Indi, Mota-Engil, contratistas locales.

Fuente: elaboración propia.

La burguesía anciana es heredera del modelo de Sustitución de Importaciones; su poder reside en la propiedad de medios de producción físicos y

fábricas. En contraste, la burguesía vieja o neoliberal perfeccionó la captura de rentas estatales mediante la privatización de servicios públicos en los 1990. La nueva burguesía, sin embargo, no requiere poseer la propiedad privada de los medios en el sentido tradicional, ya que ejerce la gestión y usufructo del capital estatal, especialmente por medio del estamento militar.

Mientras la burguesía neoliberal negociaba con el Estado desde una posición de fuerza financiera, la nueva burguesía de la 4T es una creación directa del régimen. A través de adjudicaciones directas (que superan 80% de los contratos de megaproyectos), el gobierno ha procreado una élite de contratistas y administradores militares que dependen vitalmente de la voluntad del Ejecutivo para mantener su flujo de capital.

Sin importar sus roces discursivos, estas tres facciones convergen bajo el arbitraje del Ejecutivo. La burguesía financiera (Slim/Larrea) acepta la irrupción de la nueva casta militar a cambio de estabilidad macroeconómica y el pago puntual de la deuda, mientras que la burguesía industrial del norte se repliega a sus enclaves productivos, al aceptar la paz social que los programas asistencialistas del régimen compran en el sur del país.

El poder de la «vieja» burguesía neoliberal se mide en su presencia en índices como el índice de precios de consumo (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores. Por el contrario, el poder de la nueva burguesía se mide en la opacidad del gasto público: miles de millones de dólares transferidos a fideicomisos militares y empresas estatales «zombis» (como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, o Mexicana) que operan fuera de la lógica de mercado, pero alimentan una red de proveedores y altos mandos que hoy constituyen la nueva base económica de la hegemonía política.

## Reconfiguración del poder en la 4T: militarismo, territorio y capital

La reconfiguración del poder sometido al régimen de la 4T se manifiesta en una simbiosis inédita entre el militarismo, el control territorial y el capital. Uno de los rasgos más distintivos de este periodo es la irrupción de las fuerzas armadas como un actor económico empresarial de primer orden. Esta «nueva burguesía castrense» ha alterado profundamente las reglas de la competencia frente a la burguesía civil tradicional, gestionando megaproyectos (aeropuertos, aduanas y redes ferroviarias) de la mano de regímenes de excepción justificados en la «seguridad nacional». Al operar sin licitaciones transparentes y con una opacidad estructural, el estamento militar consolida una posición de privilegio absoluto, lo que representa no sólo una transferencia de funciones administrativas, en todo caso un desplazamiento masivo de activos estatales hacia un sector que hoy se erige como un pilar autónomo de la acumulación de poder.

Semejante dinámica posee una expresión geográfica clara que redefine la geopolítica de la acumulación en el país. Al mismo tiempo la burguesía «anciana» y el capital manufacturero permanecen anclados en el eje industrial del norte y el centro —corazón del modelo de exportación—, el régimen vuelca el aparato estatal hacia la consolidación de un nuevo eje en el sureste mexicano. Afianzado en proyectos estratégicos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Corredor Interoceánico, el gobierno busca desplazar el centro de gravedad económico. El objetivo es integrar esta región al mercado global como un enclave de infraestructura logística bajo el auspicio del control directo de la nueva burocracia civil-militar, y crear así una base territorial de poder para su propia facción empresarial.

A pesar de la retórica confrontativa que emana del Ejecutivo, la 4T mantiene un cordón umbilical intacto con la burguesía neoliberal rentista mediante un pacto fiscal inamovible. Sujeto al dogma de la «pobreza franciscana» y una disciplina macroeconómica férrea, el régimen garantiza una estabilidad que beneficia en esencia a los poseedores de deuda y a los grandes capitales bursátiles. Esta austeridad no es sólo administrativa, es un compromiso político de alto nivel: asegura el flujo ininterrumpido de pagos a la «vieja» burguesía financiera y a los fondos de inversión internacionales. De ese modo, el Estado opera como un administrador eficiente de la renta financiera, que permite que las fortunas consolidadas en periodos previos sigan expandiéndose mediante intereses y dividendos a la vez que se gestan los nuevos capitales oficialistas.

### Situación de la clase obrera

Fundado en la arquitectura política de la 4T, la situación de la clase trabajadora no es una mejora lineal del bienestar, es como un proceso de reestratificación y fragmentación funcional al nuevo ciclo de acumulación. En tanto que las diversas facciones de la burguesía han logrado integrarse bajo el arbitraje del Ejecutivo para capturar el excedente, el proletariado mexicano se somete a una atomización que oculta el incremento real en su tasa de explotación. Esta dinámica se manifiesta en una «pinza de desposesión» alimentada por la superexplotación del trabajo (Marini, 1973), donde el aumento nominal de los salarios mínimos es neutralizado por la expropiación del salario indirecto y la precarización sistémica de la fuerza de trabajo.

El primer estrato, el proletariado industrial tradicional, funciona hoy como un anclaje salarial para el modelo exportador. Pese a la retórica de democratización sindical, este sector enfrenta un estancamiento en sus salarios contractuales, mientras la productividad aumenta para satisfacer las demandas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aquí, el Estado facilita una negociación colectiva fragmentada que permite a las empresas capturar la mayor parte del valor generado, y elevar la plusvalía relativa, sin que el trabajador perciba una mejora real en su calidad de vida a largo plazo.

Por otro lado, la gran masa de trabajadores volcada al precariado de servicios e informalidad actúa como una válvula de escape social. Para este grupo, la 4T ha sustituido el derecho al trabajo digno por un «salario social de subsistencia» vehiculado a través de transferencias monetarias. Estos programas no buscan alterar la base productiva del país, en cambio aseguran un nivel mínimo de consumo que retorna a las arcas de la gran burguesía comercial y financiera. Se trata de un mecanismo de desmovilización política que transforma al sujeto productor en una clientela electoral pasiva, que legitima el sistema sin cuestionar la raíz de la desigualdad.

La clase obrera actual se expande hacia una periferia transnacional y una virtualidad algorítmica, ambas esenciales para la estabilidad macroeconómica del régimen. Si bien el discurso oficial exalta a los migrantes como «héroes», en la práctica el Estado administra su expulsión y el flujo de sus remesas como un subsidio externo al consumo interno, al tiempo que permite la proliferación de un proletariado digital sin rostro ni derechos, al servicio de plataformas que operan en un vacío legal de protección laboral. El proletariado migrante en Estados Unidos representa la exportación masiva de fuerza de trabajo que el mercado interno no puede o no

quiere absorber. Este sector vive una contradicción brutal: es el sostén de la estabilidad cambiaria de la 4T por medio de las remesas, pero su reproducción social ocurre fuera del territorio nacional, sin que el Estado mexicano invierta en salud, educación y vivienda. Las remesas funcionan como un «salario social externo» que mitiga la pobreza extrema en comunidades rurales posibilita que el Estado redirija esos recursos hacia el fondo de capital y megaproyectos. Es una forma de intercambio desigual donde México exporta trabajo vivo y recibe divisas que aceitan la maquinaria del capital comercial interno.

Simultáneamente, el proletariado de servicios subordinado al capital digital (repartidores, conductores y trabajadores de plataformas) encarna la forma más moderna de la superexplotación. Estas empresas transnacionales operan gracias a una «ficción de autonomía» propia del «capitalismo de plataformas» (Srnicek, 2018), que desplaza todos los costos operativos (vehículo, combustible, mantenimiento, seguridad social) al propio trabajador. La 4T mantiene una ambigüedad regulatoria deliberada al desconocer de manera directa la relación laboral; el Estado favorece la rentabilidad de las plataformas y utiliza a esta masa laboral para absorber el desempleo juvenil y el subempleo, lo que consolida un sector que genera plusvalía en tiempo real bajo la vigilancia de un algoritmo, que carece de cualquier componente indirecto o diferido del salario.

Debido a lo anterior surge una nueva clase obrera vinculada a los megaproyectos, cuya explotación adquiere tintes castrenses debido a la gestión militar de las obras. En ese sector, la suspensión de derechos laborales básicos bajo el manto de la «seguridad nacional» es la norma que obliga a los trabajadores a aceptar jornadas extenuantes en condiciones de alta vulnerabilidad. Este fenómeno cierra el ciclo de la desposesión: mientras

el Estado desmantela a la educación y a la salud pública (expropia el salario indirecto); y centraliza los ahorros para el retiro (expropia el salario diferido); la clase obrera se reduce a un soporte invisible sobre el cual se erige el nuevo bloque de poder nacional-populista.

Cuadro 2  
Estratificación y fragmentación de la clase obrera bajo la 4T

<i>Estrato laboral</i>	<i>Proletariado industrial (anclaje)</i>	<i>Precariado de servicios (válvula social)</i>	<i>Obreros de mega-pro- yectos (fuerza estratégica)</i>	<i>Prole-taria- do migran- te (sostén externo)</i>	<i>Proletariado digital (subor- dinación algorítmica)</i>
Relación con el capital	Generador de plusvalor relativo para el mercado exportador (T-MEC).	Generador de rentas pa- ra el capital comercial y financiero.	Fuerza de trabajo para la acu- mulación originaria de la élite militar-civil.	Fuerza de trabajo exportada; proveedo- res de divi- sas para el equilibrio fiscal.	Trabajado- res de pla- taformas bajo mando tecnológico transnacional.
Mecanismo de control	Fragmen- tación de la negociación colectiva y techos salariales.	Programas asistenciales y transferen- cias mone- tarias condi- cionadas.	Disciplina militar, re- gímenes de excepción y «seguridad nacional».	Fronteras políticas y precarie- dad jurí- dica en el extranjero.	Algoritmos de gestión, métricas de rendimiento y «economía gig».

<i>Estrato laboral</i>	<i>Proletariado industrial (anclaje)</i>	<i>Precariado de servicios (válvula social)</i>	<i>Obreros de mega-pro- yectos (fuerza estratégica)</i>	<i>Prole-taria- do migran- te (sostén externo)</i>	<i>Proletariado digital (subor- dinación algorítmica)</i>
Estado del salario	Salario nominal al alza; salario real estancado frente a productividad.	Salario de subsistencia dependiente de subsidios estatales.	Salario de corto plazo con pérdida total de derechos diferidos y de salud.	Remesas (salario nominal en dólares); alto costo de vida y nula protección en origen.	Pago por tarea; ausencia total de salario indirecto (salud) o diferido (pensiones).
Representación política	Sindicatos «democratizados» pero burocratizados bajo el nuevo marco legal.	Invisibilizados bajo la categoría genérica de «pueblo».	Fuerza de trabajo bajo tutela castrense y opacidad administrativa.	Elogiados como «héroes» aunque sin derechos políticos efectivos, ni protección consular real.	Invisibilizados como «socios» o «emprendedores» para evadir la ley laboral.
Impacto principal	Aumento de la tasa de explotación por mayor intensidad del trabajo.	Dependencia clientelar y reducción de la conciencia de clase.	Expropiación de derechos laborales en nombre de la soberanía nacional.	Subsidio externo a la paz social interna; familias dependientes de la renta migratoria.	Superexplotación mediante la transferencia de costos operativos al trabajador.

Fuente: elaboración propia.

Dicho bloque de cinco estratos revela que el bonapartismo de la 4T es capaz de gestionar las formas más diversas de trabajo para asegurar la tasa de ganancia. La integración de la clase obrera al sistema se produce a través de la desposesión del salario indirecto (salud y educación) y la expropiación del ahorro diferido (pensiones), fuerza, además, al trabajador a financiar su propia explotación. A pesar de que la burguesía se refuncionaliza y se une, la clase obrera es fragmentada con una retórica clientelista e identitaria, acto que bloquea la emergencia de un sujeto político independiente.

### Reconfiguración de élites y realidad de la clase trabajadora

El análisis del carácter presuntamente «transformador» de la 4T revela que las modificaciones estructurales más profundas se han limitado a un reacomodo de las piezas del poder político y a un ajuste de los intereses de las diversas facciones de la burguesía mexicana.<sup>1</sup> Por su parte la cúpula se oxigena con nuevos actores —principalmente militares y contratistas—, la situación material de la clase trabajadora permanece estancada en niveles deprimidos. Esta «transformación» ha sido una cirugía estética al sistema de dominación para asegurar su supervivencia, sin alterar las bases de clase que sostienen la explotación en el país.

<sup>1</sup> No está de más recordar lo siguiente: «Por transformación de las condiciones materiales de vida, este socialismo [burgués] no entiende, en modo alguno, la abolición de las relaciones de producción burguesas —lo que no es posible más que por vía revolucionaria—, sino únicamente reformas administrativas realizadas sobre la base de las mismas relaciones de producción burguesas, y que, por tanto, no afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo asalariado, sirve únicamente, en el mejor de los casos, para reducirle a la burguesía los gastos que requiere su dominio y para simplificarle la administración de su Estado» (Marx y Engels, 2015).

El proyecto se define por un enfoque estatalista orientado a la administración y no a la redistribución. El centro de gravedad es una «economía del Estado» basada en un ciclo de austeridad selectiva, recortes a servicios públicos esenciales y ahorros forzosos. Aunque estos se presentan bajo la narrativa del combate a la corrupción, terminan convertidos en reasignaciones discrecionales, derroche en proyectos faraónicos y una persistente red de nepotismo. En este escenario, el Estado actúa como el custodio de la acumulación de capital, favorece la salud de las finanzas estatales para garantizar la viabilidad de los grandes negocios antes que fungir como garante de salarios dignos o servicios de calidad.

La narrativa de la «austeridad republicana» oculta una transferencia de valor silenciosa pero masiva desde el «fondo de vida» del obrero hacia el «fondo del capital». Los recursos que antes se destinaban a la reproducción social —vía salud, educación o seguridad social robusta— ahora se desplazan para financiar la infraestructura técnica y logística que las burguesías, tanto la «vieja» neoliberal como la «nueva» emergente, requieren para seguir operando. Al mantener una disciplina fiscal férrea y la contención salarial real, el Estado garantiza que las facciones rentistas y contratistas mantengan sus márgenes de ganancia a costa de una precarización sistémica de la fuerza de trabajo.

Técnicamente, esta desvalorización del trabajo se manifiesta como una transferencia forzosa de valor. Cuando el Estado hace recortes en salud, no elimina un gasto, lo traslada directamente al bolsillo del trabajador, quien se ve obligado a recurrir al mercado privado (Laurell, 2021), terminar por reducir su salario real. Esta privatización *de facto* reduce el salario real —la capacidad de adquirir bienes de subsistencia— independientemente de los ligeros aumentos nominales al salario mínimo. Además, los megaproyectos funcionan como un subsidio indirecto que reduce

costos logísticos para la burguesía exportadora y se financian con lo que originalmente debía sostener la seguridad social. Ante la falta de ahorro provocada por estos gastos privados forzosos, el trabajador cae en un encadenamiento financiero, evidenciado en el aumento del crédito al consumo como respuesta a un Estado que ha expropiado su fondo de vida para convertirlo en capital fijo.

El ciclo de desposesión culmina con la expropiación del ahorro a través de medidas como el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que por medio del argumento de «rescatar» las jubilaciones, facilita que el Estado asuma la custodia de recursos que son propiedad privada de los trabajadores para obtener liquidez inmediata y cubrir los boquetes financieros generados por proyectos improductivos y «empresas zombis». Esta acción elimina la titularidad real del trabajador sobre su patrimonio acumulado durante décadas de explotación. Es la máxima expresión del bonapartismo: el Estado decide de manera unilateral el destino del salario diferido del trabajador al presentarlo demagógicamente como un acto de justicia social, mientras garantiza flujo de capital fresco para la «nueva» burguesía militar y contratista.

De esta manera, el Estado mediante la 4T actúa como el gran conciliador de tres generaciones de la burguesía: la «anciana» industrial, la «vieja» neoliberal y la «emergente» militar-política. Este bloque de poder híbrido, encabezado por una estructura política con ADN del viejo régimen, gestiona intereses económicos claros bajo un disfraz de ideología popular. No estamos ante un cambio de régimen socioeconómico, sino ante una gestión estatalista de la crisis que favorece a las élites tradicionales y nuevas, por encima de la clase trabajadora que sigue siendo el soporte invisible del cual se extrae el excedente necesario para mantener a flote este renovado sistema de privilegios.

A continuación, en el cuadro 3 se presenta una comparación sobre la canalización de recursos de la inversión pública hacia el fondo de vida obrero y al fondo de capital.

Cuadro 3  
Contraste de inversión pública: reproducción social  
*versus* acumulación de capital

<i>Indicador / rubro</i>	<i>Fondo de vida obrero (salud y educación)</i>	<i>Fondo de capital (megaproyectos 4T)</i>
Presupuesto (variación real)	Recorte real acumulado: 15% a 22%	Incremento sobre costo original: +300%
Salud pública	Surtimiento de recetas: 70-75% / Gasto bolsillo: +40%	Inversión Dos Bocas: >18 000 mdd
Educación y ciencia	Infraestructura crítica: 60% de escuelas	Inversión Tren Maya: >30 000 mdd
Mecanismo de ejecución	Subejercicios y «austeridad republicana»	Adjudicaciones directas: >80% de contratos
Deuda e intereses	Costo financiero: 30% del presupuesto federal	Subsidios permanentes a «empresas zombis»

Fuente: elaboración propia basada en registros administrativos de SHCP, INEGI y Coneval.

La asignación presupuestaria revela que la «austeridad» no es un ahorro administrativo neutro, es una expropiación de servicios. El valor que el Estado deja de invertir en el mantenimiento de escuelas y hospitales se transfiere directamente para cubrir los sobrecostos de las obras suntuarias, que subsidian la tasa de ganancia de las constructoras y el creciente poder económico de la casta militar.

Un ejemplo de esto es el déficit en el surtimiento de medicamentos que obliga a la clase obrera a recurrir a consultorios de farmacia y a la medicina privada. Esto constituye una transferencia forzosa del salario nominal hacia el mercado sanitario, donde el trabajador termina financiando con su propio ingreso lo que el Estado omite invertir (el equivalente a 120 hospitales de tercer nivel gastados en una sola refinería).

La disparidad entre el presupuesto para ciencia/universidades y el costo del Tren Maya evidencia que el Estado prioriza la creación de infraestructura logística para el capital transnacional y el turismo sobre la calificación de la fuerza de trabajo. Se invierte en el movimiento de mercancías y capitales, no en el desarrollo de las capacidades productivas de los trabajadores.

El uso masivo de adjudicaciones directas bajo el pretexto de «seguridad nacional» ha permitido la gestación de una élite empresarial orgánica al régimen. Al evadir licitaciones, el Estado asegura que la renta pública se concentre en un grupo selecto de aliados y desplaza a la «vieja» burguesía neoliberal para alimentar a una facción leal al Ejecutivo.

A su vez, el manejo de la deuda demuestra que la disciplina fiscal no tiene como objetivo el bienestar social, en todo caso busca garantizar el pago de intereses a los acreedores internacionales y a la banca. Mientras los servicios públicos se degradan, el Estado mantiene intacto el flujo hacia el sector financiero y sostiene con subsidios a empresas estatales improductivas que funcionan como «zombis» presupuestales.

## Método político: bonapartismo y hegemonía del Ejecutivo

El método político de la 4T se define por la instauración de un «presidencialismo recargado», el cual retoma y potencia los rasgos del sistema político mexicano clásico. En esta arquitectura, el Ejecutivo predomina sobre los pesos y contrapesos institucionales, ejerciendo facultades constitucionales y, fundamentalmente, metaconstitucionales para concentrar la decisión política. Sin embargo, este régimen ha trascendido el modelo tradicional al configurar una coalición hegemónica inédita entre el partido, el Estado y el estamento militar. Este bloque no es un proyecto de ruptura sistémica, al contrario es un programa burgués envuelto en una agenda social cuyo objetivo primordial es la apropiación duradera del poder y el arbitraje del conflicto entre las distintas facciones de la clase dominante para garantizar la estabilidad del capital.

Este esquema opera gracias a un método de avanzada bonapartista *sui generis* que se despliega por medio de ejes estratégicos de control y reconfiguración nacional.<sup>2</sup> La subordinación institucional, manifestada en la erosión de la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial, permite la centralización absoluta del mando en la figura presidencial. A esto se suma una militarización funcional donde el estamento castrense deja de ser un actor de seguridad para convertirse en un pilar económico y político que

<sup>2</sup> El término de bonapartismo *sui generis*, aplicado al caso mexicano en la década de 1930 se refería a la situación donde «el gobierno oscila entre el capital extranjero y el capital nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado. Esto le da al gobierno un carácter bonapartista *sui generis*, por encima de las clases (...); puede gobernar o bien convirtiéndose en instrumento del capital extranjero y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial, o maniobrando con el proletariado, llegando incluso a hacerle concesiones, ganando de este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas extranjeros» (Trotsky, 2000:163).

apuntala la gobernabilidad. Lejos de confrontar al capital global, el régimen utiliza el anclaje internacional del T-MEC como el eje central de su patrón de acumulación, que asegura la confianza de los mercados externos al tiempo que actúa como mediador en las disputas entre la «vieja» burguesía neoliberal y la «nueva» burguesía emergente, utilizando la cooptación y el control territorial para mantener la fluidez económica.

Un rasgo distintivo de este proceso es la procreación activa de una nueva burguesía mediante mecanismos de acumulación originaria financiados por el erario. El régimen utiliza los megaproyectos y la infraestructura como vehículos para transferir de manera masiva recursos estatales a empresarios contratistas cercanos al círculo del poder. Mediante la narrativa de la «seguridad nacional» o la urgencia administrativa, se ha normalizado un esquema de asignaciones directas que fomenta sobrepuestos y consolida una red de beneficiarios leales, que desplaza a los proveedores del periodo neoliberal previo y cimenta una base económica propia para el proyecto político.

La dinámica financiera de la 4T revela una triangulación estratégica donde la concentración de dinero público —obtenida mediante recortes draconianos a los servicios y la expropiación de fideicomisos— se canaliza hacia fines específicos que aseguran la supervivencia del modelo. Primero, el cumplimiento puntual del pago de la deuda externa mantiene la credibilidad ante el capital financiero internacional. Segundo, los programas asistencialistas operan como mecanismos clientelares para la cooptación y desmovilización del movimiento popular y neutraliza cualquier resistencia desde la izquierda independiente. Por último, el excedente ahorrado se inyecta como un fondo de inversión en los proyectos que consolidan el patrimonio de la nueva élite militar y civil.

En definitiva, el proyecto de la 4T busca la aniquilación de la representación política de la «vieja» burguesía, desmantelando sus partidos tradicionales para erigir en su lugar un bloque nacional-populista de carácter omnímodo. Al amalgamar a cuadros políticos de diversos signos bajo una sola bandera, el régimen bloquea la emergencia de alternativas de izquierda real y garantiza que el Estado permanezca como el garante supremo de la acumulación de capital. Este bloque favorece a sus propias facciones empresariales, a la vez mantiene a la clase trabajadora bajo una tutela asistencialista pasiva; con lo que asegura que el conflicto social se diluya en el agradecimiento por la transferencia económica, aunque la estructura de explotación permanece intacta.

### **El *Pejenomics* y «Plan México»: planeación de la nueva acumulación**

Dentro de la arquitectura política de la Cuarta Transformación, el «Pejenomics» y el «Plan México» trascienden la categoría de simples eslóganes de campaña para constituirse como los programas rectores de la burguesía mexicana bajo el nuevo régimen. Su propósito fundamental no es la subversión del orden establecido, sino el restablecimiento del ciclo de acumulación de capital que se encontraba asfixiado por la crisis del modelo neoliberal previo. A través de estos instrumentos, el Estado busca consolidar una élite empresarial orgánica al proyecto político, asegurando una transición sistémica que preserve la rentabilidad del capital bajo una nueva dirección hegemónica.

El *Pejenomics* opera como eje de certidumbre para la burguesía financiera y bursátil, fundado en una lógica de disciplina macroeconómica

estricta. Al garantizar el respeto irrestricto a la autonomía del Banco de México y el cumplimiento de las metas de inflación, el régimen asegura que las fortunas de la «vieja» burguesía no se licúen ante la inestabilidad. En este esquema, la llamada «pobreza franciscana» o austeridad estatal no es una medida de ahorro social, es un mecanismo de extracción: la reducción del gasto público garantiza que el flujo de capital hacia el pago de la deuda externa e interna no se interrumpa, y que sirva como una fianza de cobro permanente para los tenedores de bonos y los grandes capitales financieros.

Complementariamente, el «Plan México» representa la vertiente de inversión estratégica y el mapa de la nueva geopolítica interna. Este instrumento es el vehículo por el cual el Estado crea terreno fértil para una acumulación originaria que favorece a la «nueva» burguesía, particularmente a la casta militar y el sector contratista vinculado a los proyectos del sureste. El plan busca reinsertar al país en la disputa global actual y posicionar a México como un centro logístico y de manufactura estable para el capital norteamericano en el marco del *nearshoring* y el T-MEC, profundizando el atolladero del modelo exportador (Márquez, 2007; Cypher y Delgado, 2012). Mediante esta estrategia, el régimen selecciona y fortalece a los grupos económicos dispuestos a subordinarse a la dirección política del Ejecutivo a cambio de contratos preferenciales, control territorial y seguridad jurídica para sus inversiones.

La síntesis de ambos programas revela un capitalismo de Estado con rostro popular que no busca subvertir el sistema, sino salvarlo de su propia crisis de representación y rentabilidad. El Estado interviene activamente para restablecer el ciclo de acumulación y limpia las estructuras de intermediación del periodo previo para consolidar una burguesía fiel que otorgue

soporte económico a la hegemonía duradera del partido en el poder. Es un proceso de reordenamiento de las élites donde el control político asegura la viabilidad del negocio privado a gran escala.

En conclusión, la 4T ha perfeccionado un bonapartismo *sui generis* que utiliza la retórica de la justicia social para aceitar la maquinaria del capital. Mientras el *Pejenomics* mantiene la paz con los mercados globales y la estabilidad financiera, el «Plan México» construye el patrimonio de la nueva élite militar-civil a través de la infraestructura crítica. En este escenario, la clase trabajadora es reducida a una base pasiva que recibe programas asistenciales, los cuales funcionan como un salario social de subsistencia diseñado para contener el descontento y garantizar la paz social necesaria para que el nuevo ciclo de acumulación burguesa marche sin interrupciones.

### Anatomía del régimen: restauración, bonapartismo y desposesión obrera

La 4T no constituye una ruptura revolucionaria con el orden establecido, al contrario es una restauración nostálgica que instrumentaliza un nacionalismo reaccionario. Su andamiaje ideológico funciona como un envoltorio para un proyecto que abreva directamente del régimen autoritario priista de mediados del siglo XX. Con este esquema, la categoría científica de la lucha de clases es desplazada por una cosmovisión moralista y cuasireligiosa que interpreta la realidad como una pugna providencialista entre el «bien» y el «mal». Siguiendo la lógica dicotómica de Carl Schmitt (2009), el régimen clasifica el espectro social por medio de la simplificación de «pueblo contra mafia» o «amigo contra enemigo», lo que anula el

pensamiento crítico y revela un conservadurismo de derechas. Pese a la retórica progresista, el ejercicio del poder desprecia los movimientos sociales autónomos —como el feminismo, el ambientalismo y la izquierda independiente— en favor de un orden social rígidamente tutelado por un líder carismático.

Desde la perspectiva del poder, el Estado mexicano actúa al amparo de un papel bonapartista, a su vez que se erige como el árbitro de una compleja disputa interburguesa. Su función primordial es conciliar los intereses de tres facciones en pugna y repartir cuotas de acumulación estratégicas para asegurar la paz social necesaria para el capital. Estas facciones incluyen a la «vieja» burguesía nacionalista-proteccionista que añora el modelo de industrialización por sustitución de importaciones; la burguesía neoliberal vinculada al TLCAN, consolidada durante el ciclo tecnócrata; y una burguesía emergente de mandos militares, contratistas y prestanombres que medran gracias al tráfico de influencias del régimen actual. El caso de Carlos Slim es emblemático en esta transición, funciona como el puente perfecto que se refuncionaliza desde el salinismo hasta convertirse en el contratista principal de la 4T, lo que demuestra la capacidad de la vieja oligarquía para prosperar en el esquema de asignaciones directas del nuevo gobierno.

La reconfiguración de las élites se apoya en mecanismos de acumulación originaria que desvían masivamente recursos públicos hacia la nueva casta en el poder. A través de la dotación súbita de capital, individuos sin historial empresarial acceden a tajadas presupuestales que los convierten en magnates de la noche a la mañana. Un componente central de este fenómeno es la creación de las denominadas «empresas zombis»: proyectos de infraestructura sin viabilidad comercial ni productiva, como la Refinería

de Dos Bocas o diversos aeropuertos secundarios. Estas entidades, incapaces de competir en el mercado, se mantienen artificialmente a base de subsidios y protegidas bajo el manto de la «seguridad nacional» para evadir la rendición de cuentas. En última instancia, este derroche improductivo representa una transferencia directa de riqueza social hacia directores de obra y contratistas leales al Ejecutivo.

En paralelo, el régimen despliega una política antiobrera que tiene como mayor éxito la difuminación semántica del proletariado, sustituyéndolo por la categoría de «pueblo bueno y sabio». Esta operación oculta una ofensiva objetiva contra las condiciones de vida de la clase trabajadora. El incremento al salario mínimo funciona como una estrategia de unificación hacia abajo; a la vez que se presume el aumento en la base, los salarios promedio se estancan y consolida a más de 69% de los trabajadores en niveles de subsistencia. Al no cubrir el costo de la canasta básica real, el trabajador es empujado a una dinámica de superexplotación y endeudamiento para el consumo que beneficia directamente al capital financiero. Sujeto a una austeridad neoliberal selectiva, el régimen recorta el «fondo de vida» obrero —salud, educación y ciencia— para alimentar el «fondo de capital» destinado a megaproyectos y al servicio de la deuda externa; por su lado, los programas sociales operan como mecanismos de clientelismo y control que transforman derechos en transferencias de apoyo electoral.

El análisis revela, entonces, que más allá de los roces superficiales entre facciones o las movilizaciones de las clases medias, existe una convergencia estratégica entre todas las burguesías para maximizar la explotación del trabajo. Tanto importadores como industriales coinciden en el anclaje salarial y la desarticulación de los sindicatos autónomos. El paso final de esta estrategia de despojo es la expropiación del ahorro mediante la toma

de cuentas inactivas de Afores e Infonavit (Zepeda, 2025) para financiar el Fondo de Pensiones para el Bienestar, un recurso utilizado para tapan los huecos financieros de una burocracia derrochadora. En síntesis, la 4T representa el triunfo de un bonapartismo de conciliación elitista que, mientras prohija una nueva casta militar-empresarial, bloquea sistemáticamente cualquier representación política genuina de la clase trabajadora. Lo anterior obliga al «pueblo» a financiar, mediante su austeridad y trabajo desvalorizado, la consolidación de un nuevo ciclo de acumulación burguesa.

### Recomposición de la tasa de ganancia mediante la intensificación de la explotación

Para el capital, la crisis de rentabilidad del modelo anterior no se resolvió con un cambio de sistema; en contraposición, se verificó una distribución del ingreso aún más regresiva, articulada bajo los siguientes ejes que definen la reacción beligerante del Estado mexicano actual:

*Descentralización y debilitamiento de la negociación colectiva.* Bajo la bandera de la «democratización sindical» de la reforma laboral de 2019, se ha promovido un marco de negociación fragmentado. Aunque el discurso oficial celebra el fin del «charrismo» tradicional, en la práctica se ha configurado un escenario donde el poder de negociación de los asalariados se diluye. Al atomizar las representaciones sindicales y someter los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) a procesos de legitimación burocráticos, el Estado facilita que las empresas pacten condiciones mínimas y debiliten la capacidad de respuesta colectiva frente a las exigencias de productividad del T-MEC.

*Devaluación salarial y techos a la negociación.* La estrategia de la 4T consiste en utilizar el incremento al salario mínimo como una cortina de humo para imponer techos salariales en el sector formal y calificado. En tanto que el salario mínimo sube, los salarios contractuales y promedio se mantienen estancados o con incrementos por debajo de la inflación real de la canasta básica. Este «anclaje» actúa como un mecanismo de transferencia de valor desde el trabajo hacia el capital, al estrechar el margen de maniobra en las revisiones salariales de industrias clave como la automotriz o la de servicios.

*Precarización de la contratación: salario directo en retroceso.* La restricción del componente directo del salario se ha reforzado mediante el fomento de formas precarias de contratación. Un ejemplo nítido es el programa «Jóvenes Construyendo el Futuro», que bajo el disfraz de capacitación, provee a las empresas de una masa laboral sin carga prestacional ni compromiso de contratación definitiva. Es, en esencia, un subsidio estatal al capital que permite el uso de fuerza de trabajo gratuita, al presionar a la baja la estructura salarial general y normalizar la inestabilidad laboral.

*Compresión del salario indirecto: recortes al gasto social.* El componente indirecto del salario —aquellos servicios que el trabajador no debe pagar de su bolsillo porque el Estado los provee— ha sido drásticamente comprimido. Los recortes draconianos en educación y sanidad (reflejados en el desabasto de medicamentos y el colapso del sistema hospitalario) obligan al trabajador a desviar su exiguo salario nominal hacia el mercado privado de salud y cuidados. Dicho «ahorro» del gasto público social se re-dirige hacia el fondo de capital (megaproyectos), transfiriendo el costo de la reproducción social directamente a las espaldas de las familias obreras.

*Asalto al salario diferido: pensiones y despido.* La ofensiva se completa con el deterioro del componente diferido del salario. Las contrarreformas

aplicadas al sistema de pensiones, culminan con la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, representan una expropiación del ahorro histórico de los trabajadores para tapan el déficit estatal. Al centralizar los ahorros de las Afores e Infonavit, el Estado dispone de liquidez inmediata, al mismo tiempo precariza la vejez de la clase trabajadora. Esto sumado a un sistema de justicia laboral que, en la práctica, facilita el abaratamiento del despido mediante procesos de conciliación forzosa, cierra el ciclo de la reacción capitalista.

La política económica de la 4T debe entenderse globalmente como un esfuerzo sistemático por recuperar las condiciones de rentabilidad a costa de intensificar la explotación. No es una alternativa al neoliberalismo, es su fase más beligerante: una donde el Estado interviene directamente para despojar al asalariado de sus componentes directos, indirectos y diferidos, y así asegurar la acumulación de la «vieja» y la «nueva» burguesía en un entorno de crisis a escala mundial.

### Deterioro de la clase trabajadora

El análisis de la clase trabajadora bajo el régimen de la 4T refleja una contradicción fundamental: en tanto el discurso oficial ensalza figuras abstractas como «el pueblo», las condiciones materiales y políticas de los trabajadores reales experimentan un proceso de degradación sistémica. La transición se apoya en una operación de encubrimiento ideológico dentro del espacio público mexicano —académico, mediático y gubernamental— donde existe una tendencia deliberada a la invisibilización de la clase trabajadora. Al sustituir la categoría científica de «proletariado» por conceptos amorfos como

«pueblo», comunidad o mexicanidad, el régimen busca disolver la identidad de clase en una masa informe, y suprimir el conflicto capital-trabajo del imaginario colectivo. No obstante, la realidad estadística es contundente, pues la mayoría de la población mexicana depende exclusivamente de la venta de su fuerza de trabajo para reproducir su existencia.

A fin de evaluar la situación actual, resulta imperativo distinguir entre las condiciones objetivas de la «clase en sí» y la conciencia de intereses de la «clase para sí». En el primer apartado, la clase trabajadora se caracteriza por una profunda segmentación y una desvalorización crónica. Según datos del INEGI (2025a, 2025b) y el Coneval (2025) al segundo trimestre de 2025, 33.9% de la población se encuentra en pobreza laboral, lo que implica que sus ingresos son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria básica. Esta precariedad se extiende a 56% de los mexicanos que pertenecen a la clase baja, con ingresos mensuales iguales o menores a 9 mil pesos y graves carencias en servicios básicos. A esto se añade una informalidad estratégica que, al tercer trimestre de 2025, alcanzó a 56.1% de la fuerza laboral, sector que sobrevive sin seguridad social y con ingresos que representan apenas la mitad de los percibidos en la formalidad.

La fragmentación se agrava por brechas estructurales de género y calificación. Los hombres perciben, en promedio, 1.25 veces más que las mujeres por el mismo tipo de trabajo, una disparidad que persiste tanto en el empleo formal como en el informal. Simultáneamente, el mercado laboral castiga la falta de especialización con una vulnerabilidad extrema, por su parte los sectores calificados sufren la erosión constante de sus prestaciones y estabilidad. En términos de su conformación como «clase para sí», el trabajador atraviesa un periodo de parálisis y sujeción al Estado. La tasa de sindicalización descendió a 12.8% en 2024 y, a pesar de las reformas de 2019, 85%

de los contratos colectivos siguen siendo de protección patronal. Las centrales obreras (tradicionales y emergentes), operan como apéndices gubernamentales que obstruyen cualquier asomo de sindicalismo independiente.

La crisis de representación política es absoluta, dada la inexistencia de partidos que defiendan genuinamente los intereses obreros. Organizaciones partidarias que dicen representar a los trabajadores funcionan meramente como estructuras mercenarias que negocian prebendas con la coalición gobernante. Esta carencia de autonomía se disfraza con una simulación de poder popular gracias a mecanismos de democracia directa con participaciones ínfimas, que funcionan como plebiscitos de ratificación para megaproyectos de la nueva burguesía sin un debate real con las comunidades. Asimismo, las condiciones de reproducción de la vida se ven atacadas por la inflación de los bienes-salario y la retirada del Estado de los servicios públicos de la mano de una «austeridad selectiva», que desvía recursos hacia obras suntuarias y el pago de la deuda externa.

El incremento al salario mínimo, aunque mediático, ha sido neutralizado por décadas de topes salariales que generaron una pérdida acumulada de 80% del poder adquisitivo. El aumento actual empuja los salarios promedio a la baja, que resulta en que 69% de los trabajadores gane hoy dos salarios mínimos o menos. Ante la insuficiencia del ingreso, el endeudamiento se convierte en la única estrategia de supervivencia; para 2025, el crédito al consumo creció 10.5%, lo que deja a más de 54% de la población ocupada en una situación de sobreendeudamiento que constituye una forma de encadenamiento financiero al capital.

Cuando el mercado interno y el asistencialismo fallan, la migración forzada aparece como la última válvula de escape. La gestión migratoria de la 4T adopta criterios de militarización exigidos por Estados Unidos, y usa

a la Guardia Nacional como una patrulla fronteriza *de facto* mientras se enaltece demagógicamente a los migrantes como héroes. Las remesas, que alcanzaron los 64 mil 746 mdd en 2024, no son un éxito gubernamental, sino el síntoma del fracaso del Estado para garantizar el empleo. El panorama final revela una clase trabajadora fragmentada y sin representación, donde el régimen sustituye derechos por clientelismo. Aquellos fuera del circuito de la ayuda social son forzados hacia la lumpenización y el trabajo criminal, que deviene en el deterioro social sujeto al mando de una nueva oligarquía estatal.

En el cuadro 4 se presenta una síntesis del impacto del modelo actual en la base social que sostiene la acumulación de capital. Se observa el deterioro de las condiciones de vida de la clase obrera, en contraste con la narrativa de «bienestar» por medio de indicadores de explotación y carencia.

Aunque el salario mínimo registró aumentos históricos, este fenómeno opera como una unificación hacia abajo. El crecimiento de la masa de trabajadores que percibe entre 1 y 2 salarios mínimos indica que los salarios medios se han estancado; de la misma forma, el alza en el precio de los alimentos (superior a la inflación general) anula el beneficio real. Esto confirma que la tasa de plusvalía ha aumentado: el trabajador produce más valor, pero su capacidad de reproducción se encarece.

RECONFIGURACIÓN DEL PODER, DISPUTAS INTERBURGUESAS  
Y DETERIORO DE LA CLASE TRABAJADORA

Cuadro 4

Deterioro de la clase obrera en México (2018-2025)

<i>Dimensión del deterioro</i>	<i>Indicador</i>	<i>Dato / variación</i>
Pobreza por ingresos	Población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria.	35.8% (promedio nacional con estancamiento en zonas rurales)
Salario real y canasta	Brecha entre incremento al salario mínimo vs. inflación en alimentos (canasta básica).	Inflación acumulada en alimentos: >42% (erosión del poder de compra real)
Acceso a la salud	Población sin acceso a servicios de salud.	Aumento de 16.2 a 39.1 millones de personas (2018 <i>versus</i> 2024)
Precarización laboral	Trabajadores que ganan hasta 2 salarios mínimos.	69.4% de la población ocupada (concentración en la base salarial)
Seguridad social	Trabajadores subordinados sin acceso a instituciones de salud.	37.5% de la fuerza laboral formal e informal
Gasto de bolsillo	Incremento en el gasto familiar para cubrir medicinas y consultas privadas.	Aumento de 40.9% en términos reales
Vivienda y patrimonio	Rezago habitacional y falta de acceso a crédito hipotecario para trabajadores de bajos ingresos.	8.2 millones de viviendas en situación de rezago

Fuente: elaborado con datos de Coneval (2024), INEGI (2025), Banxico (2025), Coneval (2024), INEGI (2025), INEGI (2025), INEGI (2024), Sedatu (2024), Infonavit (2025).

El dato más devastador es el triplicamiento de la carencia por acceso a la salud. Al desaparecer el Seguro Popular y fracasar el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Estado expropió el «salario indirecto» de millones. El trabajador ahora debe pagar de su bolsillo lo que antes era una obligación estatal, lo que representa una transferencia directa de valor del obrero al sector privado de servicios médicos (consultorios de farmacias), subsidiando indirectamente la rentabilidad de las grandes cadenas farmacéuticas.

La persistencia de casi 40% de la fuerza laboral sin seguridad social mínima demuestra que el modelo de la 4T descansa sobre la superexplotación. Al no existir una base productiva sólida que genere empleos de alta calificación, el sistema sobrevive gracias a una masa de reserva laboral precaria que carece de derechos diferidos (pensiones), lo que asegura mano de obra barata para la plataforma exportadora del T-MEC y para los megaproyectos estatales.

El deterioro patrimonial y el rezago habitacional, sumados a la reciente centralización de fondos de ahorro (Afores), cierran el ciclo de la desposesión. El Estado pasó de no garantizar la vida diaria a comprometer la jubilación y usar los ahorros de la clase trabajadora para financiar la solvencia de un aparato estatal volcado a los intereses de la «nueva» y «vieja» burguesía.

## Servicios públicos

La gestión de los servicios públicos en el México de la 4T revela una mutación profunda en la relación entre el Estado, el capital y la fuerza de trabajo.

Desde la perspectiva de la economía política, los servicios públicos no son meras concesiones administrativas, son la transferencia de valor hacia las condiciones generales de reproducción de la vida; es decir, constituyen un «salario social» expresado en valores de uso como salud, educación y transporte. Históricamente, la provisión estatal de esta infraestructura generaba ahorros al capital, al socializar los costos de mantener sana, educada y movilizada a la clase trabajadora. Sin embargo, bajo la actual lógica de austeridad selectiva, el Estado ha desplazado estos recursos desde la esfera del bienestar colectivo hacia la órbita de los negocios privados y los fondos de inversión que favorecen a la nueva burguesía contratista.

El cambio en las prioridades del presupuesto público se manifiesta en una pinza de desposesión: por un lado, el fomento del clientelismo mediante transferencias monetarias directas que, si bien alivian la urgencia inmediata, no transforman las condiciones materiales de existencia de los trabajadores; por el otro, la concentración de capital en megaproyectos de infraestructura que fungen como mecanismos de acumulación originaria para la élite emergente. Este esquema permite que la «vieja» burguesía se reconecte a la «ubre estatal» mientras se desmantelan los pilares de la seguridad social. El resultado es un deterioro crítico de los servicios más elementales, donde la salud, la educación y la infraestructura básica presentan rezagos que comprometen la reproducción misma de la población trabajadora.

Las cifras del periodo 2024-2025 son alarmantes y documentan el vaciamiento de lo público. La población sin acceso a servicios de salud en México ascendió a 44.5 millones de personas, lo que representa 34.2% de exclusión total del sistema sanitario. En el ámbito educativo, el rezago es igualmente profundo: para inicios de 2024, 6.4 millones de niños y jóvenes

(18% de los menores de edad) no asistían a la escuela, lo que afecta de manera desproporcionada a comunidades indígenas, rurales y personas con discapacidad. Esta desinversión en el capital humano se traduce en una fuerza de trabajo cada vez más desvalorizada y vulnerable, atrapada entre la falta de formación y la urgencia de la subsistencia.

La crisis de lo público se extiende a la seguridad y la infraestructura habitacional, elementos clave para la estabilidad de la vida obrera. Para el segundo trimestre de 2025, la percepción de inseguridad escaló a 63.2% y confirma que la mayoría de los ciudadanos considera su entorno inmediato como un espacio de riesgo. Asimismo, la carencia de infraestructura básica en la vivienda —electricidad, agua potable, drenaje y alumbrado— afecta a millones. Aunque el rezago habitacional formal se sitúa en 8.5 millones de viviendas, la cifra real de quienes padecen alguna carencia de infraestructura alcanza a 28.1 millones de personas, que evidencian cómo el Estado ha renunciado a su papel como garante de las condiciones mínimas de urbanización para las clases populares.

Ante el panorama de degradación y control bonapartista, surge la necesidad de transitar hacia una democratización radical de la vida pública. Esto implicaría romper con la simulación de las consultas amañadas para instaurar una verdadera democracia directa y una planificación participativa. Una gestión que devuelva el control a los trabajadores requeriría mecanismos de contraloría social efectiva sobre el presupuesto y la toma de decisiones, y así garantizar que el «fondo de vida» sea destinado a la satisfacción de necesidades sociales y no a la engorda de las nuevas y viejas facciones de la burguesía nacional.

## Contradicciones del proyecto 4T

### *a) Decrecimiento sin distribución progresiva del ingreso*

La fórmula clásica del reformismo —crecimiento más distribución— se sustituye por un escenario de estancamiento y concentración de riqueza. Al mismo tiempo que la 4T prometió tasas de crecimiento de 5%, la realidad del sexenio arroja el desempeño más pobre de los últimos 35 años, con una tasa anual magra de apenas 0.8%. Este fenómeno no es accidental, es producto de un modelo que prioriza el rentismo y el cumplimiento de las exigencias del capital financiero internacional por encima de la transformación productiva. El esquema de distribución del ingreso se ha congelado en una estructura regresiva: la burguesía captura 40.4% del PIB (excedente bruto de operación), mientras que la remuneración de los asalariados se estanca en 31.8%, deja al resto un ingreso mixto que encubre la precariedad de las unidades familiares.

### *b) Producto potencial no producido*

Uno de los rasgos más alarmantes de la actual gestión es la generación de un abultado «producto potencial no producido». A diferencia de los gobiernos neoliberales previos, la 4T provocó una pérdida estimada de 2.3 billones de pesos en riqueza no generada. Al crecer sólo 5% acumulado en todo el sexenio, el «efecto AMLO» resultó regresivo y representó una caída de 6.7% respecto a la tendencia de crecimiento potencial. Esta destrucción de valor tiene su origen en el desplome de los niveles de inversión, hecho que desmiente la tesis heterodoxa de que el consumo asistencialista puede sustituir a la formación bruta de capital como motor del desarrollo.

*c) Desvalorización de la fuerza de trabajo*

La estructura salarial del país sufrió un desplome generalizado mediante una «igualación hacia abajo». Los aumentos al salario mínimo, lejos de elevar el estándar de vida, han servido para ampliar la base de trabajadores que perciben apenas uno o dos salarios mínimos, sin impactar en los salarios promedio que rigen la economía real. Esta socialización de la pobreza convierte al salario mínimo en una cifra de infrasubsistencia que no cubre la canasta básica oficial. Para sobrevivir, el trabajador se ve obligado a la pluriempleabilidad o a depender de remesas y transferencias públicas, a la vez que los pensionistas enfrentan liquidaciones insuficientes que anulan cualquier posibilidad de movilidad social o solvencia patrimonial.

*d) Inflación y caída del poder de compra de salarios*

No obstante de la narrativa oficial, la inflación ha erosionado sistemáticamente el poder de compra. Entre 2015 y 2024, los salarios mínimos nominales subieron, pero debido al rezago acumulado de 40 años de metas de control inflacionario —donde el salario se usaba como ancla de precios— la mayoría se mantiene debajo del umbral de pobreza. La productividad en el sector formal duplica a la del informal, pero esta riqueza no se transfiere al trabajador; por el contrario, la inflación actúa como un mecanismo de superexplotación que transfiere el valor desde los hogares de bajos ingresos hacia los formadores de precios.

*e) Se dispara la deuda externa*

Contrario a la promesa de no endeudamiento, la deuda externa de México ascendió a 341.9 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2025. El Estado prioriza el pago de intereses —que sumaron más de 24 mil millones de dólares en 2024— y el rescate del virtualmente quebrado Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre la inversión en servicios públicos. El rendimiento de los bonos soberanos a 10 años, situados en 8.81%, constata el costo del financiamiento para un esquema de acumulación rentista. Actualmente, 4 de cada 10 pesos de deuda se destinan a gasto corriente y alimentan una estructura que favorece a la «nueva» burguesía al tiempo que elude cualquier mecanismo de auditoría ciudadana independiente.

*f) Clientelismo sin cambio estructural ni desarrollo social*

Los programas sociales operan como un sistema de transferencias monetarias para crear bases de apoyo electoral, pero carecen de una visión de desarrollo productivo. Al abandonar el apoyo a la producción agrícola, el gobierno profundiza la dependencia alimentaria, dejando la «soberanía» en una mera retórica que se estrella contra escándalos de corrupción masiva como el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). En tanto que se expropián tierras para megaproyectos en beneficio de constructoras, el reparto agrario se declara finiquitado y las tierras confiscadas al crimen organizado se rifan, ignorando cualquier posibilidad de transferir medios de producción a los trabajadores o fortalecer los bienes públicos.

*g) Nuevas avenidas de enriquecimiento para la burguesía*

La supuesta separación entre el poder político y el económico resulta ser una simulación. Se ha impuesto la lógica de una «nueva» burguesía beneficiaria de contratos monumentales: empresas como Grupo Carso, Mota-Engil e Ingenieros Civiles Asociados (ICA) concentran adjudicaciones por más de 735 mil millones de pesos. La fortuna de Carlos Slim creció 80% en este periodo, lo que demuestra que la inversión pública se ha fundido con el interés privado para consolidar una acumulación originaria bajo el disfraz de «obras emblemáticas», donde la opacidad y el sobrecosto son la norma administrativa.

*h) Corrupción rampante*

Más que un problema moral, la corrupción en la 4T es un mecanismo estructural de enriquecimiento de la alta burocracia en alianza con contratistas. Casos como el «huachicol fiscal» en contubernio con la Marina, la red de tráfico de influencias en el Tren Maya y Dos Bocas, y el nepotismo en la Secretaría del Bienestar, demuestran que el pañuelo blanco de la retórica oficial encubre un sistema de apropiación de sectores estratégicos igual o más lacerante que el de administraciones pasadas.

*i) Patrón de acumulación dependiente y plétora de dólares*

El modelo T-MEC profundiza una estructura importadora-exportadora comandada por capitales multinacionales. La economía mexicana vive una dolarización relativa: los dólares son indispensables para importar insumos

industriales y bienes de consumo básico, mientras que el consumo popular se sostiene gracias a la captación de remesas y narcodólares. El acceso preferencial a las divisas se convierte en un factor de acumulación para la «nueva» burguesía, que destruye la producción nacional para favorecer la importación masiva de mercancías baratas, muchas de ellas procedentes de Asia mediante redes de contrabando en aduanas.

*j) Quiebre del sistema sanitario y desplome de Pemex*

La «austeridad que mata» desata un colapso en el sistema de salud, con un surtimiento de recetas que no supera 40% y el fracaso absoluto de la «Farmacia del Bienestar». Asimismo, la obsesión por retornar al rentismo petrolero choca con la realidad de un Pemex en bancarrota, que sobrevive sólo mediante subvenciones estatales onerosas. La infraestructura energética es abandonada, a la vez que el dinero público se quema en refinerías que operan muy por debajo de su capacidad y mantienen el precio de la gasolina alto debido a una carga fiscal (IEPS e IVA) que representa 40% del costo final que convierte al Estado el principal beneficiario de cada litro vendido.

*k) Fiscalización regresiva e intervencionismo antiobrero*

Finalmente, el sistema fiscal mexicano grava más al trabajo que al capital. Las contribuciones laborales en México alcanzan 25.6%, frente a 9.8% en Estados Unidos, mientras que la política de control de precios actúa como una medida antiobrera indirecta al presionar las ganancias empresariales, lo que se traduce en despidos o mayor intensidad laboral. Este escenario

se complica por la gobernanza criminal en al menos 10 estados, donde el crimen organizado fija sobrepuestos a la canasta básica (tortilla, huevo, pollo) e impone una «renta criminal» que el Estado es incapaz o cómplice de frenar, consolida así un modelo de acumulación basado en el despojo y la precariedad absoluta.

### *1) Remedo de Estado benefactor*

El populismo contemporáneo en México no ha encauzado una verdadera transformación social, queda postrado en una estación de paso definida por un reformismo asistencialista de corto alcance. A diferencia de un Estado benefactor sólido, que se apoya en el fortalecimiento de los servicios públicos y la seguridad social universal, este modelo implementa programas de asistencia sin una base productiva real. Al no existir una transformación de las estructuras de propiedad ni de los métodos de producción, el régimen se ve atrapado en un ciclo de estancamiento económico donde la generación de excedente es insuficiente para sostener el gasto lo que deriva, inevitablemente, en el aumento de la deuda pública y una mayor presión fiscal sobre el consumo.

Este gasto se revela como improductivo, pues el derroche de recursos públicos no se traduce en inversión de capital fijo. En todo caso es un déficit fiscal que compromete la estabilidad futura. El resultado es una paradoja estructural: la persistencia de la pobreza a pesar del aumento del gasto social. Con base en ello, las transferencias monetarias actúan como un paliativo que acompaña la desvalorización de la fuerza de trabajo y permite que el capital mantenga salarios bajos, en tanto que el Estado subvenciona la subsistencia mínima. Esta «socialización de la miseria» deja intactos los problemas de

fondo, como la crisis sanitaria y el desfinanciamiento del sistema de pensiones, que hoy pretende parchar con la expropiación de ahorros privados.

Como señalaba Marx, las ayudas estatales o programas sociales son medidas transitorias y secundarias, no factores centrales para el desarrollo de las fuerzas productivas ni para la emancipación de la clase trabajadora. Al centrar su narrativa exclusivamente en la distribución de dinero y no en el control de la producción, la 4T renuncia a cualquier posibilidad de cambio estructural. En última instancia, este remedo de Estado benefactor funciona como un mecanismo de control político y paz social que garantiza la continuidad del régimen de acumulación burgués y sustituye los derechos laborales ganados históricamente por una relación de tutelaje y dependencia entre el jefe del Ejecutivo y una masa social subvencionada pero desposeída de poder político real.

### Conclusiones estratégicas

Si la 4T representa una reconfiguración de la hegemonía burguesa sometida a un mando bonapartista, la respuesta de los sectores subalternos no puede limitarse a la resistencia reactiva, debe enfocarse a la construcción de una alternativa propia. Para traducir el diagnóstico crítico en conclusiones estratégicas, a continuación se presentan las líneas generales de comprensión política con miras a la transformación social.

1. Independencia de clase frente al arbitraje estatal. El Estado no es un aliado, al contrario es el administrador de la explotación. La clase trabajadora debe romper con el tutelaje del Ejecutivo. Los programas asistenciales, aunque necesarios para la subsistencia inmediata, funcionan como un

mecanismo de desmovilización política. La estrategia debe virar de la «gratitud por el apoyo» a la exigencia de derechos colectivos universales (salud, educación, vivienda) que no dependan de la voluntad de un líder carismático.

2. Rearticulación del sujeto productor. Es urgente rescatar la categoría de clase trabajadora frente a la deslavada etiqueta de «pueblo». Esto implica reconocer que el poder real del cambio social además de residir en las urnas cada seis años, también lo hace en el lugar de producción. La unidad entre el proletariado industrial del norte, los trabajadores de servicios del centro y la nueva masa laboral precarizada del sureste es la única fuerza capaz de confrontar la alianza entre la «vieja» y la «nueva» burguesía militar.

3. Defensa del salario en todas sus formas. La lucha estratégica debe abarcar las tres dimensiones del salario que el régimen ha atacado. *Directo*. Exigir aumentos que superen la inflación real de la canasta básica, no solo el mínimo nominal. *Indirecto*. Frenar la transferencia de valor al capital privado y exigir la restauración de los servicios públicos de salud y educación. *Diferido*. Defender la propiedad de los trabajadores sobre sus fondos de retiro (Afores e Infonavit) frente a la expropiación estatal para megaproyectos.

4. Desmilitarización de la economía y la vida pública. La irrupción del estamento militar como burguesía empresarial es una amenaza de largo plazo para cualquier democracia obrera. La estrategia debe exigir el retorno de los militares a los cuarteles y, sobre todo, la devolución de las aduanas, aeropuertos y empresas estatales a una gestión civil bajo control de sus trabajadores; y romper el régimen de opacidad de la «seguridad nacional».

5. Hacia una agenda de desarrollo progresista. Frente al «Plan México» que profundiza la dependencia con el capital norteamericano (*nearshoring*), es necesario proponer un modelo de desarrollo basado en las necesidades de la población, y no en las cadenas de valor transnacionales. Esto implica una

reforma agraria integral y una reindustrialización nacional sujeta a criterios de sustentabilidad y control social. A su vez eliminar la narrativa de los «enclaves logísticos» que sólo sirven para el tránsito de mercancías ajenas.

6. Construcción de una representación política propia. El agotamiento de Morena como «paraguas de intereses» deja un vacío que no puede ser llenado por la derecha tradicional (PAN/PRI). La conclusión estratégica es la necesidad de un instrumento político independiente, nacido de movimientos sociales —sindicatos democráticos e izquierda independiente— que no busque conciliar con las burguesías, sino transformar las relaciones de producción.

## Referencias

- Aguayo, S. (2021). *La fuerza armada en México: entre la seguridad y el mercado*. México: El Colegio de México.
- Auditoría Superior de la Federación (2024). *Informes de auditoría sobre el gasto público y megaproyectos de infraestructura*. México: Cámara de Diputados.
- Banco de México (2025). «Informe trimestral de inflación y agregados monetarios: enero-marzo 2025». Recuperado de <https://www.banxico.org.mx>
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). (2024a). «Anexo estadístico de la medición de la pobreza multidimensional en México 2018-2022/24». Recuperado de <https://www.coneval.org.mx>
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) (2024b). *Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2024*. México: Secretaría de Bienestar.
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) (2024c). *Medición de la pobreza multidimensional en México 2018-2022/24*.

- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) (2025). «Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP): segundo trimestre de 2025». Recuperado de <https://www.coneval.org.mx>
- Córdova, A. (1972). *La formación del poder político en México*. México: Era.
- Cypher, J.M. y Delgado Wise, R. (2012). *México a la deriva: el atolladero del modelo exportador de fuerza de trabajo*. México: Miguel Ángel Porrúa.
- Echeverría, B. (2010). *Modernidad y blanquitud*. México: Era.
- Gilly, A. (2006). *La revolución interrumpida*. México: Era.
- Hernández, L. (2024). «La militarización económica: de la seguridad pública a la gestión del capital estatal». *La Jornada/Pensar México*. Recuperado de <https://www.jornada.com.mx>
- Huerta, R. (2023). «La trampa de la austeridad republicana: recorte al gasto social y transferencia al capital fijo». *Revista de Economía Crítica* (35), pp. 112-128.
- Huws, U. (2014). *Labor in the global digital economy: the cybertariat comes of age*. Monthly Review Press.
- Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) (2025). *Reporte anual de vivienda 2025*.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2024). «Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022-2024». Recuperado de <https://www.inegi.org.mx>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2025a). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE): indicadores de informalidad laboral al tercer trimestre de 2025. Recuperado de <https://www.inegi.org.mx>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2025b). «Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE): primer trimestre de 2025». Recuperado de <https://www.inegi.org.mx>

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2025c). *Estudio sobre la cuantificación de la clase media en México: actualización de niveles socioeconómicos y distribución del ingreso*. México: INEGI.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2025d). *Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)*. Recuperado de <https://www.inegi.org.mx>
- Laurell, A.C. (2021). *La salud en México: ¿derecho o mercancía?* México: Siglo XXI.
- Marini, R.M. (1973). *Dialéctica de la dependencia*. México: Era.
- Márquez, H. (2007). «Migración y desarrollo en México: entre la exportación de fuerza de trabajo y la dependencia de las remesas». *Región y Sociedad*, 19(39), pp. 3-29.
- Marx, K., y Engels, F. (2015). *Manifiesto del Partido Comunista*. Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx.
- Mendoza, J. (2025). «Nearshoring y T-MEC: la nueva cara de la dependencia». *Nexos/Economía*. Recuperado de <https://www.nexos.com.mx>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2025). *Revenue statistics in Latin America and the Caribbean 2025*. OECD Publishing. DOI: [https://doi.org/10.1787/revenue\\_lat-2025-en](https://doi.org/10.1787/revenue_lat-2025-en)
- Osorio, J. (2004). *Crítica de la economía política: de la reproducción del capital a la reproducción de la fuerza de trabajo*. México: Universidad Autónoma Metropolitana/Porrúa.
- Piketty, T. (2014). *El capital en el siglo XXI*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Poulantzas, N. (1975). *Fascismo y dictadura: la III internacional frente al fascismo*. México: Siglo XXI.
- Samaniego, N. (2024). «La brecha persistente: productividad vs. salarios reales en la era de la 4T». *Reporte Económico Trimestral*, 12(4), pp. 45-60.
- Schmitt, C. (2009). *El concepto de lo político*. México: Alianza Editorial.

- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (2024). *Programa nacional de vivienda 2021-2024*. México: Gobierno de México.
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (2024). *Presupuesto de egresos de la federación 2024: análisis de la inversión pública y programas sociales*. México: Gobierno de México.
- Srnicek, N. (2018). *Capitalismo de plataformas*. Caja Negra.
- Trotsky, L. (2000). «La industria nacionalizada y la administración obrera». En *Escritos: 1929-1940* (pp. 163-166). Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones Leon Trotsky.
- Zavaleta, R. (2020). *El Estado en América Latina*. Akal.
- Zepeda, G. (2025). «El Fondo de Pensiones para el Bienestar: ¿rescate o expropiación del salario diferido?» *Animal Político*. Recuperado de <https://www.animalpolitico.com>